

Por una Guatemala Justa y Democrática

Desde una visión **socialdemócrata**, luchamos por una sociedad donde todos tengan igualdad de oportunidades en una economía de mercado con justicia social. Defendemos políticas públicas que reduzcan la desigualdad y garanticen derechos fundamentales a través de un verdadero **Estado de bienestar**.

Democracia Participativa y Pluralismo

La democracia no es solo un sistema electoral, sino una práctica cotidiana basada en la participación ciudadana y el Estado de Derecho. En el Movimiento Semilla promovemos la discusión, el debate de ideas y el involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisiones. Para nuestro movimiento, el partido es un espacio político que incentiva el progreso democrático de nuestra institución y vela por la república, un estado laico y una representación de la población encaminada al bienestar de todas y todos los guatemaltecos. Para garantizar una democracia sólida, promovemos

- **Instituciones políticas** representativas.

Entendemos las instituciones políticas como los espacios de decisiones en los diferentes poderes del estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como comités únicos de barrios, comités departamentales y municipales de desarrollo, consejos en materias de seguridad, ambientales, y por supuesto el partido político y sus diferentes estructuras a nivel nacional. Estas instituciones políticas están concebidas como las garantistas del bien común para la población y deben estar enfocadas en el progreso de la Nación. Las instituciones políticas representativas son fundamentales para el Movimiento Semilla, ya que constituyen el pilar estructural y funcional que permite a estos partidos promover, defender y materializar sus valores esenciales: la igualdad, la justicia social y el bienestar colectivo. Estas instituciones, son los espacios donde los ciudadanos eligen a sus representantes para tomar decisiones en su nombre, ofreciendo al partido político una plataforma legítima desde la cual abogar por políticas que reflejen su ideología. Sin ellas, la implementación de medidas progresistas a gran escala, como la salud universal, la educación pública de calidad o la redistribución equitativa de la riqueza, sería prácticamente imposible. Por ello, las instituciones representativas no solo facilitan la conversión de los ideales partidarios en leyes y acciones concretas, sino que también legitiman su proyecto político ante la sociedad.

- **Partidos democráticos** que rechacen el clientelismo.

El Movimiento Semilla es un partido político con convicciones democráticas, representativas y de participación ciudadana. Está prohibida cualquier conducta que sea contraria a los valores éticos, programáticos y políticos que nos representan.

Entendemos el clientelismo como una práctica corrupta en la que se establecen relaciones de intercambio entre personas o grupos, generalmente basadas en favores, recursos o beneficios a cambio de apoyo, lealtad o votos. Estas prácticas de clientelismo, no tienen espacio alguno en el Movimiento Semilla y el ejercicio de las mismas tendrá las penalizaciones correspondientes según nuestro código de ética.

El Movimiento Semilla tiene como principio rector la participación, Los procesos democráticos serán desarrollados conforme a la realidad nacional, priorizando la participación de los afiliados haciendo su derecho a votar y ser escuchados en los distintos espacios del partido.

- **Congreso plural y transparente**, que represente los intereses ciudadanos.

Un Congreso plural es fundamental para reflejar la diversidad étnica, cultural, de género y socioeconómica de Guatemala, asegurando que todas las voces sean escuchadas en el proceso legislativo. Esto se logra mediante medidas como cuotas electorales para grupos indígenas, equidad de género a través de listas alternadas y la inclusión de representantes de áreas rurales y sectores marginados. La pluralidad también implica un debate ideológico enriquecedor que fomente consensos en temas clave para el desarrollo nacional, evitando la concentración del poder en elites urbanas.

La transparencia es esencial para combatir la corrupción y restaurar la confianza ciudadana en el Congreso. Esto se logra garantizando el acceso público a sesiones, votaciones y presupuestos, así como mediante la divulgación de conflictos de interés y declaraciones patrimoniales de los legisladores. La participación ciudadana, a través de consultas públicas y el uso de tecnología para el monitoreo en tiempo real, fortalece la rendición de cuentas y asegura que el proceso legislativo sea abierto y accesible para todos.

Un Congreso que represente genuinamente los intereses ciudadanos debe priorizar el bien común sobre intereses particulares, promoviendo políticas que reduzcan la desigualdad y protejan a los sectores vulnerables. Esto se logra mediante canales de participación ciudadana, como foros y consultas populares, y mecanismos de rendición de cuentas, como evaluaciones de desempeño. Desde una perspectiva socialdemócrata, el Congreso debe impulsar políticas redistributivas, desarrollo inclusivo y la lucha contra la corrupción para construir una sociedad más equitativa y solidaria.

- **Un Ejecutivo eficiente**, comprometido con la justicia social.

Un Ejecutivo eficiente es aquel que optimiza los recursos públicos, toma decisiones ágiles y reduce la burocracia, asegurando una gestión rápida y efectiva en beneficio de la ciudadanía. Esto se logra mediante estructuras administrativas simplificadas, el uso de tecnología para agilizar procesos y una clara rendición de cuentas que permita evaluar el desempeño de los funcionarios. En un país como Guatemala, donde la ineficiencia administrativa ha sido un obstáculo para el desarrollo, un Ejecutivo eficiente es clave para responder de manera oportuna a las necesidades de la población y maximizar el impacto de las políticas públicas.

El compromiso con la justicia social implica que el Ejecutivo priorice políticas que promuevan la equidad y reduzcan las profundas desigualdades sociales y económicas del país. Esto se traduce en el acceso universal a servicios básicos como educación, salud y vivienda, así como en la implementación de sistemas fiscales progresivos que redistribuyen la riqueza de manera más justa. Además, el Ejecutivo debe proteger los derechos de los sectores más vulnerables, como los pueblos indígenas, las mujeres y las personas en situación de pobreza, asegurando que sus voces sean escuchadas en la toma de decisiones.

Desde una perspectiva socialdemócrata, un Ejecutivo eficiente y comprometido con la justicia social debe equilibrar la gestión técnica con la sensibilidad social, promoviendo el desarrollo inclusivo y sostenible. Esto implica impulsar políticas que no solo busquen el crecimiento económico, sino que también garanticen la protección del medio ambiente y la participación ciudadana en la construcción de un Estado más solidario. En Guatemala, este enfoque es esencial para superar las brechas históricas de desigualdad y construir una sociedad más cohesionada y justa.

- **Un sistema judicial independiente**, que garantice el acceso a la justicia.

Un sistema judicial independiente y que garantice el acceso a la justicia es fundamental para cualquier sociedad que aspire a la equidad, el respeto por los derechos humanos y un Estado de derecho sólido. En Guatemala, estos principios enfrentan retos históricos como la corrupción, la impunidad y la desigualdad, que han minado la confianza en las instituciones. La existencia de un poder judicial libre de influencias externas y accesible para todos los ciudadanos resulta esencial para superar estas problemáticas y fortalecer una democracia más justa y cohesionada.

La independencia judicial se refiere a la capacidad de los jueces de tomar decisiones basadas exclusivamente en la ley, sin presiones políticas, económicas o de cualquier otra índole. Esto exige procesos transparentes para la selección de magistrados, garantías de

autonomía y sistemas de supervisión que no interfieran en su libertad. En Guatemala, sin embargo, la corrupción y la impunidad han comprometido esta independencia, permitiendo que grupos de poder influya en fallos judiciales y debiliten la imparcialidad del sistema.

El acceso a la justicia, por su parte, implica que todas las personas, especialmente las más vulnerables, puedan ejercer sus derechos sin enfrentar obstáculos económicos, geográficos o culturales. En un contexto como el guatemalteco, marcado por profundas desigualdades, esto requiere medidas concretas: llevar tribunales a zonas rurales, proveer asistencia legal gratuita y simplificar los procedimientos para incluir a comunidades indígenas y de bajos ingresos, quienes a menudo quedan al margen del sistema judicial. Ambos conceptos, independencia y acceso, son interdependientes: sin un sistema judicial independiente, la justicia tiende a favorecer a los poderosos; sin acceso universal, solo una minoría privilegiada puede beneficiarse de ella. Desde una **perspectiva socialdemócrata**, un sistema judicial con estas características es clave para avanzar hacia la equidad y la protección de los derechos humanos en Guatemala. Esto demanda reformas profundas que combatan la corrupción, promuevan la inclusión de minorías y agilicen los procesos, asegurando que la justicia sea un derecho tangible para toda la población.

- El **Estado laico** es esencial para la convivencia democrática.

La importancia de un estado laico para el Movimiento Semilla radica en su capacidad para garantizar **libertad de pensamiento, igualdad de derechos y justicia social**, principios esenciales del partido. Un estado laico asegura que las políticas públicas se construyan con base en la razón, la ciencia y el bienestar colectivo, evitando la influencia de dogmas religiosos que puedan privilegiar a ciertos grupos o perpetuar desigualdades. Esto fomenta una sociedad **inclusiva y tolerante**, donde todas las creencias —o la ausencia de ellas— son respetadas, promoviendo la cohesión social y la paz. Además, al separar la religión del gobierno, un partido socialdemócrata puede avanzar en agendas progresistas como la **educación laica**, los **derechos reproductivos** y la **igualdad de género**, sin interferencias que limitan las libertades individuales. En esencia, el laicismo fortalece la democracia al garantizar que el estado sirva a todos por igual, protegiendo tanto la fe como la diversidad de pensamiento.

Equidad y Derechos Fundamentales

Equidad y Derechos Fundamentales

Educación, salud y empleo como derechos.

El Estado tiene la responsabilidad indelegable de asegurar que toda persona acceda de manera universal y equitativa a la educación, la salud y el empleo digno. Estos son derechos

que deben estar protegidos como pilares fundamentales. Una sociedad justa se construye sobre la base de ciudadanos educados, sanos y con oportunidades reales de desarrollo.

Equidad, promoviendo la participación de grupos marginados.

Garantizar la participación activa de sectores históricamente excluidos no es solo un imperativo moral, sino una condición necesaria para una democracia plena. La equidad de género y el reconocimiento de la diversidad deben reflejarse en instituciones inclusivas, marcos normativos sólidos y políticas que eliminen barreras estructurales.

Fortalecimiento del acceso a bienes públicos

Los bienes públicos no deben ser privilegios de unos pocos, sino condiciones compartidas para una vida digna. Una política socialdemócrata debe invertir sostenidamente en la provisión de servicios esenciales, con mecanismos claros de planificación, evaluación y mejora continua, asegurando que lleguen de forma eficaz a todas las comunidades, sin discriminación ni clientelismo.

Reconocer la multiculturalidad de Guatemala

Reconocer la cosmovisión de los pueblos indígenas y respetar sus formas de organización es esencial para un modelo democrático que valore la igualdad desde el respeto a la diferencia. Esto implica su participación en la implementación de las políticas públicas.

Economía para el Bienestar Colectivo

Fomento del emprendimiento y la inversión generando empleo digno.

Impulsar el dinamismo económico mediante el apoyo a emprendedores, la inversión responsable y la generación de empleos con condiciones laborales justas. El Estado debe facilitar un entorno propicio para la innovación y el crecimiento productivo, combinando libertad económica con reglas claras que eviten la precarización del trabajo.

Fiscalización ciudadana.

Una economía para todos solo es posible con instituciones que funcionen bajo principios de legalidad, eficiencia y fiscalización. La rendición de cuentas debe ser una práctica cotidiana, en la que los ciudadanos tengan acceso a información clara y a mecanismos reales de fiscalización, para asegurar que cada centavo invertido sirva al bien común.

Apoyo a pequeñas y medianas empresas.

Las pequeñas y medianas empresas son el corazón de una economía inclusiva y resiliente. Para que prosperen, es indispensable que el Estado garantice acceso equitativo al financiamiento, asistencia técnica y entornos regulatorios justos, reconociendo su papel estratégico en la generación de empleo local, innovación y cohesión social.

Competencia justa, evitando monopolios y abusos corporativos.

Una economía moderna y saludable requiere reglas del juego claras, donde ninguna empresa abuse de su posición para distorsionar los mercados o explotar a consumidores y trabajadores. El Estado debe ejercer su rol regulador con firmeza y transparencia, protegiendo la competencia como un bien público, garantizando condiciones equitativas para todos los actores sin privilegiar intereses especiales.

Estabilidad y crecimiento inclusivo

El desarrollo debe reflejarse en una mejor calidad de vida para todas las personas. Se deben combinar estabilidad fiscal con inversión social y política industrial dentro de un marco de desarrollo sostenible. Un Estado moderno actúa con visión de largo plazo, sin dejar a nadie atrás.

Protección al Ambiente

Para el Movimiento Semilla las políticas ambientales responsables en Guatemala, basadas en la conservación y el uso sostenible, deben integrar tres pilares fundamentales: la **gestión comunitaria del agua** como garantía de un derecho humano y herramienta de empoderamiento; la **regulación estricta de industrias extractivas** para proteger a las comunidades y el medio ambiente; y la **promoción de prácticas sostenibles** que preserven los recursos naturales y fortalezcan la resiliencia social. Este enfoque no solo aborda los desafíos ambientales del país, sino que también avanza hacia una sociedad más justa, inclusiva y participativa, en línea con los ideales de justicia social y sostenibilidad que deberían guiar el desarrollo de Guatemala. Nuestro país es muy diverso, por eso proponemos:

Acceso al agua como derecho humano, priorizando la gestión comunitaria

El acceso al agua potable es un derecho humano fundamental, pero en Guatemala muchas comunidades rurales e indígenas enfrentan una grave escasez de este recurso, lo que perpetúa la pobreza, la exclusión y los problemas de salud pública. Esta situación refleja una distribución inequitativa de los recursos naturales, exacerbada por la falta de políticas inclusivas y la concentración de poder en manos de élites económicas y políticas.

Una solución efectiva y sostenible es priorizar la **gestión comunitaria del agua**. Este enfoque implica la creación de sistemas locales y participativos que permitan a las comunidades gestionar sus propias fuentes de agua, desde la captación hasta la distribución. En Guatemala, ejemplos como los comités de agua en áreas rurales

demuestran que la participación ciudadana no solo garantiza el acceso equitativo al recurso, sino que también empodera a las comunidades, fortalece la cohesión social y fomenta la resiliencia ante desafíos como la sequía o la contaminación. Esta estrategia alinea la conservación del agua con la justicia social, al devolver el control a quienes dependen directamente del recurso, en lugar de dejarlo en manos de entidades centralizadas o privadas que a menudo priorizan el lucro sobre el bienestar colectivo.

Regulación de industrias extractivas, garantizando respeto a comunidades y al medio ambiente

Las industrias extractivas, como la minería y la explotación petrolera, han generado intensos conflictos socioambientales en Guatemala. Estos proyectos suelen operar sin el consentimiento de las comunidades locales, causando deforestación, contaminación de fuentes de agua y desplazamiento de poblaciones indígenas y campesinas. La falta de regulación efectiva ha permitido que los intereses corporativos prevalezcan sobre los derechos humanos y la protección ambiental, profundizando la desigualdad y la vulnerabilidad de los sectores más marginados.

Una política ambiental responsable debe establecer **mecanismos estrictos de regulación** que garanticen el respeto a las comunidades y al medio ambiente. Esto incluye la implementación de **consultas previas, libres e informadas**, conforme al Convenio 169 de la OIT, que otorga a las comunidades afectadas el derecho a decidir sobre los proyectos en sus territorios. Además, se requieren normativas ambientales rigurosas que obliguen a las empresas a mitigar su impacto, reparar daños y adoptar prácticas sostenibles. Para que esto sea efectivo, el Estado debe asumir un rol activo y comprometido, equilibrando el desarrollo económico con la protección de los ecosistemas y los derechos de la población. Solo así se puede evitar que la extracción de recursos naturales se convierta en una fuente de conflicto y degradación, transformándola en un proceso que respete tanto a las personas como al entorno.

Conservación y uso sostenible de los recursos

Más allá del agua y las industrias extractivas, las políticas ambientales responsables deben abarcar la **conservación y el uso sostenible de los recursos naturales** en su conjunto. En un país como Guatemala, donde la biodiversidad es un patrimonio invaluable pero está amenazada por la deforestación y el cambio climático, es esencial proteger las áreas naturales mediante la creación y mantenimiento de reservas ecológicas y parques nacionales. La reforestación, especialmente en zonas degradadas como la cuenca del río Motagua o el Corredor Seco, es otra medida clave para restaurar ecosistemas y combatir la erosión del suelo.

En el ámbito productivo, dado que la agricultura es la base de la economía para gran parte de la población, se debe promover el **uso sostenible** a través de técnicas agroecológicas. Estas prácticas, como el uso de abonos orgánicos y la rotación de cultivos, reducen la dependencia de insumos químicos externos, preservan la fertilidad del suelo y fortalecen la soberanía alimentaria. Este enfoque no solo protege el medio ambiente, sino que también mejora la seguridad alimentaria y la resiliencia de las comunidades rurales frente a las crisis climáticas y económicas, contribuyendo al desarrollo sostenible del país.

Un Estado Moderno y Transparente

Un Estado moderno y transparente es esencial para el desarrollo equitativo y sostenible de cualquier sociedad, y se construye sobre tres pilares fundamentales: reformas para modernizar la administración pública, desconcentración efectiva y combate frontal a la corrupción.

Reformas para modernizar la administración pública: Este aspecto implica actualizar los procesos y estructuras gubernamentales para hacerlos más eficientes y accesibles. La digitalización de servicios, como plataformas en línea para trámites, permite reducir la burocracia, ahorrar tiempo a los ciudadanos y minimizar el contacto directo con funcionarios, lo que a su vez disminuye oportunidades de corrupción. Asimismo, la capacitación constante del personal público asegura que estén preparados para responder a las demandas de una sociedad en cambio, fortaleciendo la calidad del servicio.

Desconcentración efectiva, fortaleciendo la presencia del gobierno central en lo local: Esto se refiere a distribuir poder y recursos desde el gobierno central hacia las administraciones locales, permitiendo una gestión más cercana a las necesidades de las comunidades. Por ejemplo, programas de desarrollo regional que otorguen a las municipalidades autonomía para manejar proyectos de infraestructura o servicios básicos no sólo mejoran la calidad de vida, sino que también promueven la participación ciudadana y una gobernanza más inclusiva.

Combate frontal a la corrupción, con instituciones independientes y fiscalización ciudadana: La transparencia requiere instituciones autónomas que investiguen y sancionen actos corruptos sin interferencia política, como organismos de control con poder real. Además, la fiscalización ciudadana empodera a la sociedad civil para supervisar al gobierno mediante auditorías sociales o plataformas de denuncias anónimas, asegurando que el poder se ejerza con integridad y en beneficio del bien común.

En conjunto, estos elementos configuran un Estado eficiente, cercano a la ciudadanía y confiable, capaz de adaptarse a los retos contemporáneos y de fortalecer la confianza pública en las instituciones, lo que resulta clave para la estabilidad y el progreso sostenible.

Nadie solo, sembramos juntos.